
Amnistía Internacional

INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL

Continúa la crisis de los refugiados timorenses

Diciembre de 1999

RESUMEN

ÍNDICE AI: ASA 21/208/99/s
DISTR: SC/CO/GR (02/00)

En septiembre de 1999, la comunidad mundial fue testigo de la crisis de derechos humanos que se extendió en Timor Oriental. En los días siguientes al anuncio del resultado del referéndum, favorable a la independencia, las milicias que actuaban concertadamente con las Fuerzas Armadas de Indonesia (*Tentara Nasional Indonesia*, TNI) y la policía expulsaron de sus casas a aproximadamente el 75 por ciento de la población.¹ Decenas de miles de personas huyeron a los montes. Además, más de un cuarto de millón huyeron o fueron expulsadas de Timor Oriental. La mayoría de estas personas cruzaron la frontera con Timor Occidental en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Timur.

Si bien Timor Oriental ya está a salvo de la violencia de la milicia y de las fuerzas de seguridad indonesias, la crisis continúa para entre 100.000 y 150.000 personas que permanecen en Timor Occidental.

Una delegación de Amnistía Internacional que ha regresado recientemente de la región halló que la presencia de la milicia y la falta de garantías en materia de seguridad continúan ensombreciendo las perspectivas de una repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y de dignidad para los refugiados que permanecen en Timor Occidental. También constituye motivo de honda preocupación el que estos refugiados corren un peligro constante de ser víctimas de amenazas, intimidación, hostigamiento, extorsión y, en algunos casos, homicidios ilegítimos, «desaparición» y violencia sexual.

¹ A fines de 1998 y principios de 1999 se crearon nuevos grupos de milicias en Timor Oriental que utilizaron las amenazas, la intimidación y la violencia para intentar obligar a la población a que apoyara el mantenimiento de la integración en Indonesia. Existen pruebas claras de que estos grupos se crearon con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Indonesia y tanto esta fuerza como la policía indonesia apoyaron sus actividades directa e indirectamente. Para más información véanse los documentos de AI titulados *East Timor: Seize the Moment* (Índice AI: ASA 21/49/99), de junio de 1999; *Timor Oriental: La violencia ensombrece las perspectivas de estabilidad* (Índice AI: ASA 21/91/99/s), de agosto de 1999, y *East Timor: Demand for Justice* (Índice AI: ASA 21/191/99), de octubre de 1999.

Los principales responsables de estas violaciones de derechos humanos son las mismas milicias que desempeñaron un papel protagonista en los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental y a las que actualmente se permite actuar de forma prácticamente impune en Timor Occidental. Para complicar una situación ya de por sí grave, las condiciones materiales en los campos se están deteriorando durante la estación de lluvias y como consecuencia de las deficientes condiciones médicas y sanitarias están aumentando las muertes y las enfermedades.

También se ha visto amenazada la seguridad personal de los representantes de las organizaciones que trabajan para proporcionar asistencia humanitaria y facilitar la repatriación de los refugiados. Las medidas tomadas para proteger tanto a este personal como a los refugiados de las amenazas, la intimidación y la violencia física han sido insuficientes.

Aunque el gobierno indonesio ha entregado su responsabilidad administrativa en Timor Oriental a la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), sigue siendo responsable de la seguridad y el bienestar de los timorenses orientales refugiados en Indonesia. Entre sus responsabilidades está la de proteger a los refugiados de los ataques y amenazas y asegurarse de que reciben la ayuda humanitaria debida. El gobierno también está obligado a cooperar plenamente con las organizaciones pertinentes para crear las condiciones que permitan regresar con la debida seguridad a Timor Oriental a los refugiados que lo deseen.

Desde cualquier criterio que se considere, el gobierno indonesio ha incumplido sus compromisos, entre ellos el de crear las condiciones necesarias para que haya una repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y dignidad. Si bien hacer respetar el derecho a regresar debe ser una prioridad urgente, el hecho de que las autoridades de Indonesia no hayan logrado facilitar el regreso rápido y en condiciones de seguridad de los timorenses orientales también deja a los refugiados ante la posibilidad de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos y agrava y prolonga la violación inicial de la expulsión en masa de Timor Oriental.

PALABRAS CLAVE: REFUGIADOS1 / ACNUR / DEFENSA CIVIL / FOTOGRAFÍAS

Este texto resume el documento titulado *Indonesia y Timor Oriental: Continúa la crisis para los refugiados timorenses* (Índice AI: ASA 21/208/99/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1999. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. En nuestro sitio web (<http://www.amnesty.org>) podrán acceder a una amplia variedad de documentos sobre éste y otros asuntos. Para los documentos traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>. También pueden recibir los comunicados de prensa de Amnistía Internacional por correo electrónico solicitándolos en <http://www.amnesty.org/news/emailnws.html>

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL

**Continúa la crisis de los
refugiados timorenses**

Diciembre de 1999
Índice AI: ASA 21/208/99/s
Distr: SC/CC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL

Continúa la crisis de los refugiados timorenses

Introducción

No pensamos en la integración [en Indonesia] o en la independencia de Timor Oriental, pensamos en regresar a nuestras casas.

Refugiado en Nenuk, Atambua, 10 de noviembre de 1999.

En septiembre de 1999, la comunidad mundial fue testigo de la crisis de derechos humanos que se extendió en Timor Oriental. En los días siguientes al anuncio del resultado del referéndum, favorable a la independencia, las milicias que actuaban concertadamente con las Fuerzas Armadas de Indonesia y la policía expulsaron de sus casas a aproximadamente el 75 por ciento de la población.² Decenas de miles de personas huyeron a los montes. Además, más de un cuarto de millón huyeron o fueron expulsadas de Timor Oriental. La mayoría de estas personas cruzaron la frontera con Timor Occidental en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Timur.

Si bien Timor Oriental ya está a salvo de la violencia de la milicia y de las fuerzas de seguridad indonesias, la crisis continúa para entre 100.000 y 150.000 personas que permanecen en Timor Occidental.

Una delegación de Amnistía Internacional que ha regresado recientemente de la región halló que la presencia de la milicia y la falta de garantías en materia de seguridad continúan ensombreciendo las perspectivas de una repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y de dignidad para los refugiados que permanecen en Timor Occidental. También constituye motivo de honda preocupación el que estos refugiados corren un peligro constante de sufrir amenazas, intimidación, hostigamiento, extorsión y, en algunos casos, homicidios ilegítimos, «desaparición» y violencia sexual.

Los principales responsables de estas violaciones de derechos humanos son las mismas milicias que desempeñaron un papel protagonista en los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental y a las que actualmente se permite actuar de forma prácticamente impune en Timor Occidental. Para complicar una situación ya de por sí grave, las condiciones materiales en los campos se están deteriorando durante la estación de lluvias y las muertes y enfermedades están aumentando como consecuencia de las deficientes condiciones médicas y sanitarias.

La mejora de las condiciones de seguridad a fines de noviembre de 1999 permitió un mayor acceso a los campos por parte de las organizaciones humanitarias internacionales para que proporcionaran la asistencia médica que tanta falta hacía y de los representantes del Alto Comisionado de

² A fines de 1998 y principios de 1999 se crearon nuevos grupos de milicias en Timor Oriental que utilizaron las amenazas, la intimidación y la violencia para intentar obligar a la población a que apoyara el mantenimiento de la integración en Indonesia. Existen pruebas claras de que estos grupos se crearon con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Indonesia y tanto esta fuerza como la policía indonesia apoyaron sus actividades directa e indirectamente. Para más información véanse los documentos de AI titulados *East Timor: Seize the Moment* (Índice AI: ASA 21/49/99), de junio de 1999; *Timor Oriental: La violencia ensombrece las perspectivas de estabilidad* (Índice AI: ASA 21/91/99/s), de agosto de 1999, y *East Timor: Demand for Justice* (Índice AI: ASA 21/191/99), de octubre de 1999.

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que facilitaran las repatriaciones. Sin embargo, la situación sigue siendo inestable y el número de personas que regresan es bajo. Amnistía Internacional teme que muchos refugiados siguen sin poder decidir libremente y con conocimiento de causa si se marchan o se quedan debido a que desconocen las opciones disponibles y a las constantes amenazas e intimidaciones de las milicias. La extorsión en los pasos fronterizos y los ataques contra los convoyes de refugiados que regresan a Timor Oriental también disuade a la gente de regresar, así como la desinformación generalizada sobre las condiciones que se encontrarán al regresar a Timor Oriental.

También se ha visto amenazada la seguridad personal de los representantes de las organizaciones que trabajan para proporcionar asistencia humanitaria y facilitar la repatriación de los refugiados. Las medidas tomadas para proteger tanto a este personal como a los refugiados de las amenazas, la intimidación y la violencia física han sido insuficientes.

Aunque el gobierno indonesio ha entregado su responsabilidad administrativa en Timor Oriental a la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), sigue siendo responsable de la seguridad y el bienestar de los timorenses orientales refugiados en Indonesia. Entre sus responsabilidades está la de proteger a los refugiados de los ataques y amenazas y asegurarse de que reciben la ayuda humanitaria debida. El gobierno también está obligado a cooperar plenamente con los organismos pertinentes para crear las condiciones que permitan regresar con la debida seguridad a Timor Oriental los refugiados que lo deseen.

Desde cualquier criterio que se considere, el gobierno indonesio ha incumplido sus compromisos, entre ellos el de crear las condiciones necesarias para que haya una repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y dignidad. Si bien hacer respetar el derecho a regresar debe ser una prioridad urgente, el hecho de que las autoridades de Indonesia no hayan logrado facilitar el regreso rápido y en condiciones de seguridad de los timorenses orientales también deja a los refugiados ante la posibilidad de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos y agrava y prolonga la violación inicial de la expulsión en masa de Timor Oriental.

Condiciones en los campos y asentamientos de refugiados

Las condiciones para los refugiados se van deteriorando según avanza la temporada de lluvias. Es conocido que algunas zonas en las que están situadas los campos son propensas a las inundaciones. En muchos campos el abastecimiento de agua y las condiciones higiénicas son inadecuadas. Por ejemplo, en los campos de Tua Pukan y Noelbaki, cerca de Kupang, al parecer las letrinas y los lavabos están rotos o tienen un mantenimiento deficiente y el abastecimiento de agua está contaminado. Aunque en algunos campos se han proporcionado refugios de contrachapado y de hierro ondulado, muchos refugiados viven bajo lonas impermeabilizadas, trozos de plástico o refugios hechos de hojas, ninguno de los cuales brinda una protección eficaz frente a las intensas lluvias que registra Timor Occidental. Estas condiciones han incrementado inevitablemente los porcentajes de enfermedades y epidemias, como la diarrea crónica, la malaria y la tuberculosis. También están aumentando las tasas de mortalidad, especialmente entre los niños. Según las cifras del ACNUR, desde septiembre de 1999 hasta principios de diciembre de 1999, 174 personas murieron en el campo de Tua Pukan. Sólo en el plazo de nueve días, del 22 de noviembre al 1 de diciembre de 1999, murieron en el campo 32 niños y 3 adultos.

Además de enfrentarse a las malas condiciones materiales, en algunos campos los refugiados corren el peligro de sufrir abusos. Especialmente preocupantes son los persistentes informes sobre violencia sexual contra las mujeres. Según los informes recibidos de varias fuentes diferentes, algunas mujeres han sido secuestradas de un campo en Soe, cerca de Kupang, y obligadas a prostituirse.

Algunos refugiados que en noviembre de 1999 habían regresado del distrito de Belu a Dili y a los que entrevistó Amnistía Internacional también hablaron de reiterados casos de violación. Según dos de ellos, varias mujeres permanecieron recluidas como esclavas sexuales en la casa de un soldado de las Fuerzas Armadas de Indonesia en Rai Henek Oan, cerca de Betun. Una de las mujeres que al parecer estuvo recluida allí y fue violada reiteradas veces fue Filomena Barbosa. Posteriormente, un miembro de las milicias informó a su hermana de que la habían matado hacia mediados de octubre. El entrevistado creía que se había actuado contra ella porque había participado activamente en la campaña en favor de la independencia de Timor Oriental. Hay más testigos que han manifestado que por las noches era habitual que se llevaran a mujeres y niñas de los campos de Belu para después violarlas. Amnistía Internacional no está en condiciones de confirmar estos informes pero considera que cuando la protección es inadecuada y el acceso a los campos se restringe, las mujeres y las niñas son extremadamente vulnerables a la violación y otras formas de violencia sexual.

El gobierno indonesio es el responsable de la seguridad de los refugiados y debe tomar medidas para garantizar su protección, especialmente la de los grupos vulnerables, como mujeres y niños. En la Conclusión 48 del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR (EXCOM), la comunidad internacional expresó enérgicamente su condena a que se violaran los derechos y se atentara contra la seguridad de los refugiados por medio de ataques militares o armados contra los campos de refugiados. Los Estados deben respetar y garantizar a los refugiados derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, así como el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos crueles,

inhumanos o degradantes. El carácter de los campos debe ser exclusivamente civil y humanitario y es indispensable que las autoridades velen por que se mantenga este carácter.³

Las Conclusiones 72 y 73 del EXCOM establecen las obligaciones de los Estados para evitar o eliminar las amenazas contra la seguridad personal de los refugiados, como permitir que se pueda acceder a ellos rápidamente y sin trabas, situar los campos en lugares seguros, garantizar la seguridad de los grupos vulnerables, proteger a los refugiados de la violencia sexual, investigar las violaciones de su seguridad personal y perseguir penalmente y aplicar medidas disciplinarias estrictas contra los responsables de estas violaciones.

El programa de voluntaria

Lentitud de los

El programa voluntaria de los timorenses en Timor el 8 de octubre de lentamente y con dos meses del proceso de 75.000 personas han Oriental con la Por su parte, otras cruzado la frontera medios, en lo que se «regresos pesar de estos calcula que entre personas, muchas de expulsadas a la Oriental, siguen

improvisados, en tiendas de campaña o en alojamientos proporcionados por la iglesia o por habitantes de Timor Occidental que simpatizan con ellos.

A fines de noviembre de 1999, el número de personas que regresaban se redujo notablemente a unos centenares al día frente a las cuatro mil de media diaria que se habían registrado a mediados de noviembre. Según la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental, entre los motivos para esta disminución estaban el acceso restringido a los campos a los colaboradores de las

repatriación

avances

de repatriación refugiados Occidental, iniciado 1999, ha avanzado oscilaciones. A los comienzos del repatriación, unas regresado a Timor ayuda del ACNUR. 40.000 personas han por sus propios conoce como espontáneos». A desplazamientos, se 100.000 y 150.000 las cuales fueron fuerza de Timor viviendo en campos

³ El EXCOM es una organización intergubernamental formada por cincuenta gobiernos que en su reunión anual aprueba conclusiones sobre aspectos fundamentales de la protección a los refugiados. Si bien estas conclusiones no son vinculantes en el mismo sentido en que lo son las disposiciones de los tratados para sus Estados Parte, representan el punto de vista de la comunidad internacional y en ello reside su poder de convicción.

organizaciones humanitarias, la intimidación de los refugiados, las lluvias (que habían inundado los pasos de acceso y dejado intransitables algunas carreteras), las campañas de desinformación y la disminución del número de refugiados fácilmente accesibles.

Indudablemente habrá personas que no deseen regresar a Timor Oriental debido a que durante la violencia registrada en septiembre sus casas y medios de vida fueron destruidos o porque su salario procedía del Estado indonesio. Se cree que muchos funcionarios se encuentran en esta situación. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que muchas personas no disponen ni de la información ni de la posibilidad de optar con libertad y conocimiento de causa entre quedarse o regresar.

El gobierno indonesio se comprometió oficialmente a apoyar el proceso de repatriación. El 14 de octubre de 1999, el ministro de Bienestar Social firmó, en nombre del gobierno, un acuerdo con el ACNUR que garantizaba a este organismo el acceso libre y sin trabas a los refugiados timorenses en Timor Occidental y le daba carta blanca para organizar la repatriación de los refugiados que quisieran regresar. Asimismo, el gobierno se comprometió a permitir a todos los timorenses decidir si deseaban regresar o continuar donde estaban sin sufrir ninguna forma de intimidación o amenaza. El 22 de noviembre de 1999, la Comandancia Militar Regional Indonesia con responsabilidad sobre Nusa Tenggara Timul (*Kodam IX/Udayana*), la Policía Provincial de Nusa Tenggara Timul y la Fuerza Internacional para Timor Oriental (INTERFET) suscribieron un acuerdo por el que creaban el Grupo Conjunto de Vigilancia Fronteriza. La función asignada al Grupo es garantizar las condiciones de seguridad en la zona fronteriza y facilitar una afluencia eficaz y segura de los refugiados. En virtud del acuerdo, las autoridades indonesias se comprometieron a «reducir las actividades indeseables de los elementos de las milicias», incluso mediante su desarme y detención, y «facilitar el regreso de los refugiados a Timor Oriental».

Se han tomado algunas medidas para desarmar a las milicias y en la actualidad son escasos los informes recibidos sobre milicias portando armas abiertamente. La decisión tomada a principios de diciembre de 1999 por el general Kiki Syahnakri, comandante militar regional de Nusa Tenggara, de separar a las milicias de los refugiados en los campos de refugiados también puede lograr nuevas mejoras. Sin embargo, las consecuencias de esta clase de acuerdos sólo podrán ser parciales hasta que no se desarme y disuelva a *todos* los grupos de milicias y la policía y el ejército indonesio cumplan con su cometido de proporcionar seguridad a los refugiados y a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan con ellos, incluso mediante la detención de los miembros de la milicia y de otros responsables de violaciones de derechos humanos.⁴

⁴ La Conclusión 83 del EXCOM sobre la seguridad del personal del ACNUR y de otras organizaciones humanitarias exige a los Estados y a otras partes interesadas que se abstengan de actuaciones que impidan u obstaculicen a dicho personal llevar a cabo sus funciones. Además, deben tomarse medidas para salvaguardar su seguridad física y sus propiedades y facilitarles llevar a cabo las funciones que les encomienda su mandato. Esto incluiría tomar medidas para que el personal del ACNUR y de otras organizaciones humanitarias actúe en los campos llevando a cabo sus funciones de ayuda y protección y aplicando los programas de repatriación voluntaria.

La Conclusión 83 del EXCOM también exige que los Estados tomen todas las medidas necesarias para investigar exhaustivamente cualquier delito que se cometa contra el personal del ACNUR y el de otras organizaciones humanitarias y llevar ante la justicia a los responsables.

En un intento aparente por agilizar el proceso de repatriación, el gobierno indonesio ha impuesto el 31 de marzo del 2000 como plazo para suprimir la ayuda a los refugiados, y desde el 4 de diciembre de 1999 ha reducido la ayuda alimenticia. El gobierno ha advertido que los refugiados deben regresar a

Error! Filename not specified.

Timor Oriental lo antes posible o emigrar a otras zonas de Indonesia. Si se reducen o suprimen las ayudas al tiempo que no se toman medidas contra las mismas fuerzas que están impidiendo que la gente pueda marcharse, la consecuencia ineludible será el aumento del sufrimiento de los refugiados, cuyas condiciones ya se están deteriorando gravemente.

Para que las repatriaciones sean voluntarias es preciso que no haya factores que «empujen» o «tiren», alentando en exceso a los refugiados a volver prematuramente o en condiciones carentes de seguridad o indignas. Entre estos factores en Timor Occidental están la gran inseguridad de los campos de refugiados, la imposición de plazos arbitrarios para el regreso y la retirada prematura de la ayuda alimenticia y humanitaria en los campos. Es probable que estos factores lleven a una repatriación caótica que ponga en peligro indebidamente a los refugiados y a las personas que intentan ayudarlos.

Acceso

Aunque legalmente el ACNUR tiene derecho a acceder a todos los refugiados en Timor Occidental, en la práctica el acceso a los campos y asentamientos sigue siendo limitado. En general, ha sido más fácil acceder a los campos de Kupang que a los de los distritos de Atambua y Belu, pero hay excepciones, y mientras se permita que las milicias actúen de forma prácticamente impune no hay garantías reales de que vayan a mantenerse los niveles actuales de acceso.

La situación del campo de Haliwen, que cuenta al parecer con unos 20.000 refugiados, ejemplifica los obstáculos que sigue padeciendo la repatriación en otras partes. Los intentos del ACNUR de entrar en el campo se han topado con amenazas, insultos y ataques físicos. El 10 de noviembre de 1999, los representantes del ACNUR y de la OIM que intentaban recoger a refugiados para proceder a su repatriación se vieron rodeados por miembros de las milicias armados con machetes y lanzas. Uno de los representantes del ACNUR fue agredido y, durante su retirada, los vehículos del equipo, protegidos por más de una decena de miembros armados de la policía y de la Comandancia Estratégica de Reserva (Kostrad) fueron apedreados. Aunque la policía realizó efectuó disparos al aire para alejar a los agresores, no se hizo ningún intento por detener o desarmar a los miembros de las milicias implicados.

Un delegado de Amnistía Internacional en Batugade, Timor Oriental, entrevistó a un grupo de 60 refugiados que consiguió salir del campo de Haliwen. El grupo, formado por ocho familias, todas ellas de Atsabe, en el distrito de Ermera, había planeado irse el 10 de noviembre de 1999 pero al presenciar el ataque contra el convoy del ACNUR y de la OIM se dieron cuenta de que había pocas esperanzas de que se los llevaran del campo. Cambiaron sus planes y, aprovechando la noche, se dirigieron a la comisaría de Atambua, donde lograron unirse a un convoy que el 11 de noviembre de 1999 se dirigía a Batugade. Para no alertar a las milicias sobre sus planes, antes de su marcha habían sacado clandestinamente del campo sus escasos bienes durante diferentes desplazamientos al mercado de Atambua. Sin embargo, a pesar de sus precauciones, las milicias se enteraron de sus planes y los amenazaron con quitarles la ropa y enviarles a Timor Oriental desnudos. También les dijeron que les seguirían y que los matarían si abandonaban el campo. Los refugiados contaron que las milicias los amenazaban diariamente y que el día que se marcharon de Haliwen vieron cómo golpeaban a tres personas.

Los informes más recientes de Atambua indican que la situación en el distrito no ha variado sustancialmente y, aunque el ACNUR continúa con las repatriaciones, incluso en Haliwen, ni la seguridad ni el acceso están garantizados en absoluto.

Una situación similar se da en los campos de Noelbaki, Tua Pukan y Naibonet, en los que, al parecer, hay unas 20.000 personas, la mayoría de los refugiados que continúan en el distrito de Kupang. El ACNUR no logró negociar el acceso a estos campos hasta el 23 de noviembre de 1999, pero una vez más éste se limitó a visitas breves con el fin de llevarse a los refugiados que estaban dispuestos y en condiciones de ser repatriados. Al parecer, el porcentaje de regresos de estos campos se ve influido por la presencia visible e intimidatoria de las milicias.

La base de la capacidad del ACNUR para proteger y prestar ayuda a los refugiados es poder acceder a ellos sin trabas y en condiciones de seguridad. El gobierno de Indonesia tiene la obligación de cooperar con el ACNUR para garantizar este acceso, además de cumplir con sus propias obligaciones de tratar a los refugiados según las normas internacionales. El hecho de que no se proporcionen las condiciones necesarias de acceso y seguridad al personal del ACNUR y de las organizaciones de ayuda humanitaria para que actúen eficazmente significa en la práctica que se reducen las posibilidades de que las repatriaciones sean voluntarias, ordenadas y en condiciones de seguridad y de dignidad. Un paso necesario para garantizar el acceso al ACNUR y la seguridad de los refugiados es que el gobierno desarme y disuelva inmediatamente a las milicias y que lleve ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos.

«Extracciones» de refugiados

Según la Conclusión 40 del EXCOM y el manual de repatriación voluntaria del ACNUR, las repatriaciones deben ser voluntarias y en condiciones de seguridad y dignidad. La Conclusión 40 (b) exige que:

Se [debe] proceder a la repatriación de los refugiados únicamente en virtud de su deseo libremente expresado; se [debe] respetar siempre el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la necesidad de que se reali[ce] en condiciones de absoluta seguridad, preferiblemente al lugar de residencia del refugiado en su país de origen

Con el fin de asegurar que la repatriación es voluntaria y que se lleva a cabo en condiciones de seguridad y dignidad, el país de asilo debe cooperar con el ACNUR y los refugiados deben recibir la información necesaria sobre las condiciones en su país de origen para tomar su decisión de repatriarse.

Por lo general, el regreso en condiciones de seguridad significa volver en condiciones de amparo legal (con garantías para la seguridad e integridad personal y garantías de no padecer discriminación, persecución ni castigos al regreso), de seguridad física (incluida la protección de los ataques armados), y de seguridad material tras el regreso (acceso a tierras o medios de vida). Las normas que se refieren al regreso en condiciones de dignidad incluyen el requisito de que los refugiados no sean maltratados; si regresan espontáneamente pueden hacerlo a su propio ritmo, y no deben ser separados arbitrariamente de sus familiares durante la repatriación. Las necesidades de los grupos vulnerables deben recibir la atención debida. En este contexto, el permiso para llevar consigo bienes que puedan transportarse es especialmente importante a tenor de la situación de devastación a la que van a regresar.

En las condiciones actualmente imperantes en Timor Occidental, el ACNUR no es capaz de llevar a cabo un proceso de repatriación ordenada en ninguno de los campos, y no le cabe otra alternativa que aplicar un planteamiento «relámpago»: llegar con camiones vacíos y llevarse a los refugiados que están dispuestos y listos para salir. Estas operaciones de «extracción» se llevan a cabo con rapidez y sin apenas aviso para evitar que las milicias se preparen o interfieran. Es posible que algunos de los refugiados que se marchan se hayan registrado previamente, aunque no es un requisito previo y durante la operación no se comprueba ningún nombre.

La celeridad y la forma en que se llevan a cabo las operaciones de «extracción» producen inevitablemente cierto grado de pánico o de confusión dado que los refugiados deben precipitarse para recoger sus pertenencias y cargarlas en los camiones. No hay posibilidades de informarles plenamente sobre el proceso, ni de facilitarles detalles sobre su llegada, ni siquiera sobre si habrá otros medios de transporte al llegar a Timor Oriental. Las características del proceso también incrementan la posibilidad de que los miembros de una familia se separen, una cuestión preocupante en cualquier proceso de repatriación.

Los miembros de las Fuerzas Armadas de Indonesia y de la policía de Indonesia se encargan de la seguridad de estas operaciones. Sin embargo, aunque los convoyes van escoltados por ambas fuerzas de seguridad, por lo general sus miembros se han mostrado poco dispuestos a intervenir si se produce un incidente.

A lo largo de las últimas semanas ha habido varios ataques contra los convoyes. En algunos casos, parecía que la intención de las milicias era el robo y la extorsión, mientras que en otros golpearon o secuestraron a personas concretas. Estos ataques disuaden a otros refugiados de arriesgarse a realizar el mismo viaje, de modo que, a menudo, la noticia de un incidente provoca que durante los siguientes días se reduzca el número de personas que quieren regresar.

Los informes sobre las extorsiones llevadas a cabo por el grupo miliciano El Hierro Rojo y Blanco⁵ en Passabe, paso que conduce al enclave de Oecusse, combinados con los informes sobre el hostigamiento padecido por los repatriados a manos de los grupos de autodefensa civil de Timor Oriental

⁵ *Besi Merah Putih* es una de las milicias partidarias de la integración más conocidas. Tiene su sede oficial en el distrito de Liquica, en Timor Oriental, y sus miembros fueron responsables de algunas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental en 1999, entre ellas ejecuciones extrajudiciales.

en el propio enclave, redujeron a fines de noviembre a su mínima expresión el ritmo de regresos a Oecusse. El 8 de diciembre de 1999, según informes, los milicianos obstaculizaron el primer intento llevado a cabo por el ACNUR para llevarse refugiados de un campo en Labur, a unos 40 kilómetros de Atambua, y exigieron que se quedaran. Al parecer, únicamente una familia salió con el ACNUR ese día. El 25 de noviembre de 1999, en el distrito de Belu, los camiones de la OIM fueron apedreados cuando se dirigían a recoger refugiados al punto de espera de Betun. El incidente motivó que no se llevaran a cabo más intentos ese día.

Dos refugiados tuvieron que ser hospitalizados como resultado del ataque llevado a cabo el 17 de noviembre contra un convoy en Atambua. Durante el ataque, la milicia golpeó a una mujer embarazada y a su esposo mientras esperaban para marcharse con el convoy del ACNUR y de la OIM frente a la comisaría de policía de Atambua, que es un punto de espera para los refugiados que vuelven de la zona. Según los informes, la policía no intervino para impedir el ataque, que concluyó cuando los representantes del ACNUR llegaron al lugar con miembros de las Fuerzas Armadas de Indonesia, que arrestaron a dos miembros de la milicia. Dos días antes, el 15 de noviembre de 1999, según informes, las milicias tuvieron recluidos a dos refugiados durante veinticuatro horas en la zona de Babometo, cerca del enclave de Oecusse. Al parecer, el suceso fue una represalia por la detención de dos presuntos milicianos a manos de INTERFET en Oecusse. A principios de noviembre, la policía indonesia detuvo a dos hombres que viajaban en un convoy de refugiados al puerto de Atapupu en Atambua. Al parecer, ambos fueron entregados a miembros de la milicia AHI para que los interrogaran.⁶

La difusión de información errónea sobre las condiciones en Timor Oriental también ha contribuido a que los refugiados se muestren reticentes a volver. Entre los rumores más frecuentes están las historias de hambrunas, de hostigamiento sexual y violación de las mujeres por las tropas de INTERFET y las amenazas de que las milicias seguirán a los refugiados y los matarán. A fines de noviembre, el ACNUR inició una campaña publicitaria para intentar contrarrestar esta desinformación a través de los periódicos y la radio. Sin embargo, la repercusión de las campañas de información es necesariamente limitada entre una población de refugiados en la que los índices de escolarización y de alfabetización son bajos, a la que se puede acceder de forma limitada y que, en virtud de su reciente experiencia en Timor Oriental, está traumatizada y es improbable que confíe de buena gana en las autoridades.

⁶ La milicia AHI actúa fundamentalmente en el subdistrito de Liquidoe del distrito de Ainaro, en Timor Oriental.

Grupos de refugiados enfrentados a problemas específicos

Si bien los niveles variables de control de las milicias y el ambiente general de temor, reforzado por la desinformación sobre las condiciones en Timor Oriental, impiden regresar a muchos refugiados, hay unos grupos específicos de personas para los que la repatriación presenta dificultades especiales, especialmente activistas independentistas particularmente conocidos o personas relacionadas con ellos, miembros de las milicias y sus familias y miembros o ex miembros de las fuerzas militares o policiales indonesias.

Varias personas entrevistadas en Dili a mediados de noviembre expresaron su preocupación por familiares que deseaban ser repatriados, pero que no podían serlo. Los casos puestos en conocimiento de Amnistía Internacional eran los de las esposas e hijos de miembros del Consejo Nacional de Resistencia Timorese (*Conselho Nacional da Resistência Timorese*, CNRT) contra los que, al parecer, se actuaba como represalia por las actividades políticas de sus familiares varones.

Amnistía Internacional fue informada de que a la esposa de un miembro del CNRT de Ermera, que lleva en Atambua desde el 7 de septiembre de 1999 con sus cinco hijos, se le estaba impidiendo volver a Timor Oriental a causa de las actividades políticas de su esposo (no se facilitan los nombres por motivos de seguridad). Según el informe, la mujer había viajado a Kupang a mediados de octubre para registrarse ella y sus hijos a fin de poder ser repatriados. Sin embargo, al volver a Atambua para recoger a sus hijos le dijeron que ella se podía marchar pero que sus hijos no, y que la matarían si intentaba llevárselos. Por otro lado, un activista del CNRT de Los Palos, distrito de Lautem, afirmó que su esposa, que se encuentra en el campo de Tua Pukan, tiene miedo de registrarse porque miembros de los grupos milicianos *Tim Alfa* y *Jati Merah Putih* le han dicho que nadie con relaciones con el CNRT debe pensar en volver a su país.⁷

También necesitan atención específica las personas que apoyaron la opción autonómica en el referéndum de agosto de 1999, o que participaron en las actividades de las milicias, así como los miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad indonesias. Se han recibido informes sin confirmar de que las personas de estos grupos pueden estar sufriendo presiones de las milicias para que se queden en Timor Occidental. Sin embargo, también se considera que el temor a sufrir represalias en Timor Oriental está reteniendo a muchos, y este temor no es injustificado. Amnistía Internacional recibió varios informes sobre secuestros y palizas contra presuntos miembros de la milicia a manos de los grupos de autodefensa civil en Dili, Maliana y Liquica en las primeras semanas de noviembre. Más recientemente se han recibido informes sobre un grupo de autodefensa civil que ha establecido en Oecusse controles y que busca entre los refugiados que regresan a miembros de la milicia, a los que detiene e interroga. Al parecer, hay otro grupo que se dedica a intimidar a los repatriados en el paso fronterizo entre Haekesak y Maliana.

⁷ Tanto *Tim Alfa* como *Jati Merah Putih* actuaban en Los Palos, distrito de Lautem, Timor Oriental antes de septiembre de 1999.

Conclusiones y recomendaciones

Mientras la atención se dirige a la reconstrucción y reorganización dentro de Timor Oriental, hay decenas de miles de timorenses que no pueden participar en la reconstrucción de su devastado país porque se les impide regresar. La crisis en Timor Oriental no concluirá hasta que no se haya repatriado a todas las personas que desean regresar y todos los refugiados estén a salvo del peligro de sufrir violaciones de derechos humanos. El regreso inmediato, en condiciones de seguridad y voluntario de los timorenses a sus comunidades también constituye un paso fundamental para solucionar la grave violación de derechos humanos que constituyó la expulsión en masa.

Amnistía Internacional vuelve a pedir al gobierno indonesio que:

- proteja a los refugiados timorenses en Timor Occidental y otras partes de Indonesia de las amenazas y ataques de las milicias y de los miembros de las fuerzas militares o policiales indonesias;
- tome medidas inmediatas y efectivas para desarmar y dismantelar a las milicias;
- lleve ante los tribunales a los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos, entre ellos los miembros de las milicias y de las fuerzas de seguridad indonesias;
- conceda al ACNUR y a otras organizaciones de ayuda humanitaria acceso completo y sin trabas a los refugiados en Timor Occidental y garantice que estos refugiados reciben la ayuda humanitaria necesaria;
- coopere plenamente con el ACNUR en sus esfuerzos por organizar un programa de repatriación voluntario, garantizando que la repatriación puede tener lugar en condiciones de seguridad y de dignidad;
- garantice que los refugiados pueden ejercer sus derechos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, incluido su derecho a abandonar el país si lo desean;

La comunidad internacional debe:

- instar al gobierno indonesio a cumplir las obligaciones anteriormente expuestas, entre ellas conceder al ACNUR y a otras organizaciones de ayuda humanitaria acceso sin restricciones a los refugiados de Timor Occidental y a otras zonas de Indonesia;
- proporcionar al ACNUR y a sus actividades los recursos económicos necesarios para proteger y ayudar a los refugiados;
- velar por que todo programa de repatriación vaya acompañado de medidas para garantizar la seguridad de los refugiados, protegiéndolos incluso de los ataques físicos de la población local, y que se les proporcione alojamiento y se atiendan sus necesidades humanitarias.